

Las políticas neoliberales y la crisis en América del Sur*

Luiz Alberto Moniz Bandeira**

Al finalizar los años 80, considerada la "década perdida" desde la perspectiva del desarrollo, la situación no sólo del Brasil sino de toda América Latina se presentaba muy difícil y sombría. No se percibía una, solución viable para el problema de la deuda externa, sobre todo, ante la falta de inversiones y debido a la creciente fuga de capitales tanto extranjeros como nacionales que, a su vez, llevaron al estancamiento económico en medio de un incontrolable proceso inflacionario. Esta crisis, que comenzaba a afectar seriamente a los intereses de Estados Unidos al reducir América Latina su capacidad de importar para cumplir con el servicio de la deuda externa, llevó al Institute for International Economics¹ a convocar una conferencia a la cual fueron invitados ocho economistas de países latinoamericanos -Argentina, Brasil, Chile, México, Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia -con la finalidad de formular un diagnóstico y sugerir medidas de ajuste para superarla. En aquella oportunidad, el economista norteamericano John Williamson presentó un documento que contenía diez propuestas de reforma económica, sobre las cua-

* Traducido del portugués por Eduardo Madrid, Centro de Estudios Internacionales y Latinoamericanos, Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social, Facultad de Ciencias Económicas, UBA.

** Doctor en Ciencia Política, Profesor titular de Política Exterior del Brasil (Universidad de Brasilia) y autor de varias obras sobre las relaciones de Estados Unidos con Brasil y los demás países de América Latina.

1. Este Instituto fue creado en 1981 con recursos del *German Marshall Funds* y mantenido con donaciones de la *Ford Foundation*, *William and Flora Hewlett Foundation* y *Alfred P. Sloan Foundation*.

les había amplio consenso en Washington, tanto entre los miembros del Congreso y de la Administración, como entre los tecnócratas de las instituciones financieras internacionales, agencias económicas del Gobierno estadounidense, la Reserva Federal y los *think tanks*.² Las propuestas, que apuntaban a la estabilización monetaria y al pleno restablecimiento de las leyes del mercado, consistían en: 1) disciplina fiscal; 2) cambios en las prioridades del gasto público; 3) reforma tributaria; 4) tasas de intereses positivas; 5) tasas de cambio de acuerdo con las leyes del mercado; 6) liberalización del comercio; 7) fin de las restricciones a las inversiones extranjeras; 8) privatización de las empresas estatales; 9) desregulamiento de las actividades económicas; 10) garantías para los derechos de propiedad.³

La adopción de tales medidas, como la privatización de las empresas estatales, el desregulamiento de la economía y la liberación unilateral del comercio exterior, constituirían la condición fundamental para que los países de América Latina pudiesen renegociar la deuda externa y recibir nuevos recursos de los organismos financieros internacionales. De esta manera, pasarían a depender del financiamiento del BID o del BIRD para la ejecución de obras públicas, teniendo que ajustar sus respectivas políticas económicas y decisiones de inversiones a la fiscalización internacional mediante condicionamientos que amenazaban alcanzar también a la política de defensa con la fijación de límites para los gastos militares. Al mismo tiempo, la liberación del comercio exterior impulsada por los países latinoamericanos permitirían a los Estados Unidos privilegiar principalmente los intereses del sector bancario y financiero en la cuestión de la deuda externa, satisfacer las demandas de los exportadores norteamericanos y transformar en superávit su déficit comercial con la región.

Estas propuestas, conocidas como el Consenso de Washington, recomendaban que el Estado se retirase de la economía, tanto en su papel de empresario como de regulador de transacciones domésticas e internacionales, a fin de que toda América Latina se sometiese a las fuerzas del mercado, lo que permitiría posteriormente la formación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), de Canadá a Tierra del Fuego, según la propuesta del presidente George Bush, con el lanzamiento en 1990 de *The Enterprise for the Americas Initiative*. Esta iniciativa, surgida ante las dificultades para reducir el desequilibrio de la balanza comercial estadounidense contemplaba la apertura de otros mercados, lo cual posibilitaría a los Estados Unidos aumentar aún más las exportaciones de bienes para los países de América Latina, sin necesidad de negociar con sus gobiernos y hacer otras concesiones, dado que con la hegemonía sobre el ALCA obtendrían amplia libertad para movilizar bienes y factores de la producción (excepto fuerza de trabajo), restringiendo el acceso a su propio mercado interno bajo los más variados pretextos, como competencia desleal, riesgos sanitarios, seguridad nacional,

2. Williamson, John, *The Progress of Policy Reform in Latin America*, Institute for International Economics, Washington DC, Enero de 1990, pp. 9-10.

3. Williamson, J., *op. cit.*, pp. 10-33.

etc.⁴ De este modo, podrían enfrentar más fácilmente a la Unión Europea, cuyo mercado se había cerrado, así como el de Japón, y también compensar su déficit comercial con otras regiones. La estabilidad monetaria y el repunte del crecimiento económico de América Latina se transformaron indudablemente necesarios para el logro de tales objetivos.

Esas medidas, consustanciadas en el Consenso de Washington, no constituían una novedad. Eran liberales y ortodoxas, similares a las que habían sido intentadas por los gobiernos militares, sobre todo en la Argentina, Uruguay y Chile. La experiencia de Argentina era aún más antigua. Desde la caída de Perón, en 1955, ella estuvo sometida, con breves intervalos, a políticas económicas liberales y planes de estabilización, recomendados por el FMI y por los gobiernos de los Estados Unidos. Electo presidente en 1958. Arturo Frondizi, en vista del deterioro de la balanza de pagos, terminó por ceder a las exigencias del FMI para obtener nuevos préstamos, así como a las de los militares, colocando al liberal Álvaro Alsogaray en el Ministerio de Economía, y sometió a la Argentina a un drástico plan de estabilización monetaria, que implicaba restringir las importaciones y ejecutar un programa de austeridad. No obstante la experiencia negativa del plan de estabilización monetaria aplicado por Frondizi, José María Guido, que lo sucedió, se dispuso también a ejecutar, con el aval del FMI, otros dos shocks económicos que afectaron seriamente a la industria, transfiriendo renta para el sector agropecuario, es decir, para la oligarquía rural, solidaria con los intereses del capital financiero. La instrumentación de medidas restrictivas del crédito perjudicaron, principalmente, a las pequeñas y medianas empresas, sobre las cuales se asentaba el importante núcleo, puesto que los grupos oligopólicos no sólo disponían de mayores recursos propios para el capital de giro, sino que conseguían mayor capitalización del excedente económico, mediante el incremento de la productividad. Y la baja de su PBI per cápita continuó con un índice de 0,3%, entre 1961 y 1963. En 1966, Arturo Illia, cuyo breve gobierno criticaba las imposiciones del FMI y los contratos petrolíferos firmados por la administración de Frondizi, fue derrocado y los militares asumieron directamente el poder. La tendencia estructural al estancamiento de la Argentina no se revirtió, sino que se agravó, como resultado de la política económica del gobierno encabezado por el general Juan Carlos Onganía (1966-1970), cuyo Ministro de Economía, Adalberto Krieger Vasena, suspendió casi todas las trabas a las importaciones de manufacturados, llevando a centenas de empresas argentinas a la bancarrota y agudizando los conflictos sociales, que tuviera su punto culminante en 1969, con la eclosión del Cordobazo, el primero de una serie de levantamientos obreros en varias ciudades, y de la guerrilla urbana.

4. Pinheiro Guimarães, Samuel, "Market Access in a ALCA", trabajo presentado durante la mesa redonda del *Fifth Colloquium of the Project IDB/ECLAC*, "Support in the Process of Hemispheric Trade Liberalization", realizado el 28 y 29 de septiembre de 1992 por el Banco Interamericano de Desarrollo y por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (ECLAC).

La deuda externa de la Argentina ya alcanzaba, entonces, un monto aproximado de u\$s 4 billones.⁵

Perón, cuando volvió al poder en 1973, denunció que “el imperialismo y sus agentes vernáculos siguen sosteniendo la necesidad de que nos reduzcamos a continuar siendo un país de pastores y de agricultores”, aclarando que “no obedece a otra cosa la verdadera destrucción que sobre nuestra industria se viene realizando desde 1955 (...)”. Y, después de subrayar que “los Estados Unidos no sólo no nos ayudaron sino que nos sabotearon sin solución de continuidad e hicieron todo lo posible por impedir nuestro progreso”, declaró:

“Si consideramos que el mal de nuestros países radica expresamente en su descapitalización y su endeudamiento del que jamás se logra salir, podemos apreciar las ventajas que pueden acarreararnos las ayudas prometidas que, además, nos obligan a menudo a someternos a exigencias sociales y políticas que, por intermedio del Fondo Monetario Internacional, llegan por el conducto económico, que en manera alguna, puede justificar una entrega ignominiosa o una subordinación que raya en la infamia”.⁶

Perón, mientras tanto, falleció antes de cumplir un año de asumir el gobierno (01.07.1974) y las condiciones económicas de la Argentina enseguida volvieron a deteriorarse. El gobierno de Isabelita Perón, confuso y sin cohesión, fue, en tales circunstancias, derrocado por las Fuerzas Armadas (1976). El general Jorge Rafael Videla, jefe de la Junta Militar, nombró a José Alfredo Martínez de Hoz (de la misma corriente doctrinaria de Álvaro Alsogaray y Krieger Vasena), ministro de Economía y, en medio de una sangrienta represión política, llevó adelante otro radical programa de liberalización económica, en los términos pactados con el FMI, con el objetivo, entre otros, de liquidar la base social de la CGT y del peronismo, mediante la desindustrialización de la Argentina, destinada, de acuerdo a la teoría de las ventajas comparativas, a exportar carne y cereales que podía producir con eficiencia e importar las manufacturas que necesitaba. Sus medidas de shock, que contaron con la previa aprobación del consenso de las Fuerzas Armadas, consistieron en el congelamiento de salarios, extinción de los subsidios, reducción de los gastos públicos, privatización de las empresas estatales, liberación del crédito, de los precios, de los alquileres urbanos y arrendamientos rurales, así como de una completa apertura del mercado interno a las importaciones, con la eliminación de las tarifas aduaneras y la valorización de la tasa de cambio. No tardaron en darse los resultados de ese programa de liberalización económica, cuya ejecución, el embajador de los Estados Unidos, Robert Hill, juzgara propicia a los intereses norteamericanos y anunciara al Departamento de Estado, cerca de un mes después del golpe militar de 1976, proponiendo el apoyo del Eximbank y el respal-

5. Perón, Juan D. *La Hora de los Pueblos*. Buenos Aires, Pleamar, 1973, p. 27.

6. Perón, Juan D., *op. cit.*, p. 110

do para programar la deuda argentina.⁷ En efecto, la inflación cayó de 386% en 1976, a 150% en 1977, pero la Argentina creció apenas 1,5% y la participación de los salarios en la renta nacional, bajó, en el mismo período, a 31%, el índice más bajo desde 1935.⁸ La junta militar, bajo la orientación de Martínez de Hoz, transfirió al sector privado, entre 1976 y 1980, cerca de 120 empresas industriales y comerciales, mientras que el Banco Nacional de Desarrollo y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, vendieron las acciones de otras 207 empresas y redujeron su participación en más de 297.⁹ La apertura del mercado devastó, al final, a las industrias nacionales, que no pudieron competir con las mercaderías importadas, a bajo precio, del Japón y de otros países de Asia, así como de Europa y de los Estados Unidos, y la participación de la industria en el PBI en la Argentina, del orden de casi 30% en 1974, decayó para 25%, en 1980, mientras la deuda externa saltaba de u\$s7,8 billones en 1975, a cerca de u\$s27,1 billones en 1980.¹⁰ Ese endeudamiento, que sustentaba las reservas monetarias que posibilitaban la apertura de la economía, servía solamente, tanto para estimular formas de consumo suntuario (importaciones de artículos superfluos y de aquéllos que la propia Argentina producía), así como para financiar viajes turísticos al exterior. El incremento de acumulación de capital, a través de la compresión de los salarios, no significó, sin embargo, una mejora en las inversiones productivas que alimentaran un nuevo ciclo de expansión de la economía. Los excedentes, de los cuales los grandes empresarios y banqueros se apropiaran, se evadieron del país, en medio de una incontrolable especulación financiera y de la recesión industrial, dejando al pueblo argentino con la mayor deuda externa per cápita del mundo. La industria se transformó en chatarra, el desempleo aumentó y los conflictos sociales y políticos se agudizaron. La crisis de la deuda externa, deflagrada por México en 1982, disipó la expectativa de la oligarquía rural, alimentada por Martínez de Hoz, de restaurar la Argentina bucólica e idílica, sin crisis de energía, sin falta de alimentos, sin exceso de población, sin agitación social, exportando carne y cereales e importando todo aquello que necesitaba, como a fines del siglo XIX, en la *belle époque* de Buenos Aires. Pero, como bien observó Rogelio Frigerio, la Argentina era “el único país que ha caminado en el sentido al que sigue la historia de la humanidad: se ha desindustrializado”.¹¹ El general Leopoldo Galtieri, intentando salvar el régimen militar, invadió el archipiélago de las Malvinas. Y al desastre económico, so-

7. Rapoport, Mario. *Historia Económica, política y social de la Argentina (1880-2000)*. Buenos Aires, Ediciones Macchi, 2000, p. 740.

8. Martínez de Hoz, José. *Bases para una Argentina Moderna - 1976-1980*. Buenos Aires, s/ed., 1981, p. 51.

9. Martínez de Hoz, José. *Op. cit.*, p. 51.

10. Lichtenzstein, Samuel. *Capital financiero, deuda externa y políticas económicas en América Latina*, Montevideo, 1985, p. 167. Frigerio, Rogelio. *Diez años de la crisis Argentina*. Buenos Aires, Sudamericana - Planeta, 1983, pp. 94-96.

11. Lichtenzstein, Samuel. *Op. cit.*, pp. 47-48.

cial y político, sumó el desastre militar. La Argentina perdió la guerra contra Gran Bretaña, que recibió el apoyo de los Estados Unidos, no recuperó las Malvinas y, el régimen militar se desmoronó.

Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, se electó en 1983, pero tampoco pudo controlar la hiperinflación y pasó el gobierno a Carlos Menem, que insistió en reestructurar la economía argentina según el modelo neoliberal defendido por los liberales Álvaro Alsogaray, Adalberto Krieger Vasena y José Martínez de Hoz, contrariando toda la doctrina de Perón. Sin embargo, a fines de los años '90, la situación en la Argentina, como en toda América del Sur, se presentaba todavía más difícil y compleja que a fines de la década anterior, a pesar del éxito inicial en el control de la inflación. Durante su primer mandato, el presidente Carlos Menem (1989-1999), consiguió controlar la inflación y promover cierto crecimiento económico gracias al tipo de cambio atado al dólar (*currency board*) y al ingreso de recursos externos, posibilitado por la privatización de empresas estatales y la brutal desnacionalización de la economía. Al final de su gobierno, sin embargo, la situación financiera de la Argentina se había transformado en extremadamente crítica. Con una deuda externa del orden de los u\$s 144,6 mil millones de dólares – que equivalía a aproximadamente el 50% de su PBI, estimado en u\$s 271,9 mil millones¹² (1998) – la Argentina terminó el año 1999 con un déficit en su balanza comercial de u\$s 2,17 mil millones, en tanto el superávit en el comercio intra-regional alcanzó a u\$s 2,45 mil millones.¹³ El progresivo y rápido agravamiento de los “déficits-gemelos” – el déficit en las cuentas externas (balanza comercial y de servicios) y el déficit en las cuentas internas del gobierno– que tenían que ser obligatoriamente cubiertos por importaciones de capital, comenzaron a generar desconfianza en los inversores, tanto argentinos como extranjeros, obligándolos a suspender las inversiones directas y de portafolio, como así también, los empréstitos. Ante tales circunstancias, desde 1998 las expectativas de un *default* en los pagos externos de la Argentina se transformaron en una realidad ante la posibilidad de que dejase de cumplir sus compromisos externos (deuda: amortización y/o intereses). Esto profundizó la desconfianza y generó un círculo vicioso especulativo internacional, sobre todo después de la crisis que soportó el Brasil a principios de 1999. En 1998, la Argentina negoció un acuerdo con el FMI, de modo que le permitiese reducir el déficit fiscal, pero la prolongada recesión de 1999 impidió el cumplimiento de las metas establecidas. De esta manera, al suceder a Menem en la jefatura de gobierno, Fernando De la Rúa tuvo que aplicar un aumento de impuestos y recortes presupuestarios, tratando de reducir el déficit fiscal, que alcanzó al 2,5% del PBI en 1999, y recibió del FMI un empréstito *stand by* de u\$s 7,4 mil millo-

12. Dólares de 1995. De acuerdo con el INDEC, el PBI de la Argentina en 1998 era de u\$s 298,3 mil millones, calculado a precios de mercado. <http://www.indec.mecon.ar/default.htm>. Por el método de *purchasing power parity*, utilizado por el Banco Mundial era de u\$s374 mil millones.

13. <http://www.aladi.org/inicio.htm>. Véase también <http://www.indec.mecon.ar/default.htm>

nes para evitar el agravamiento de la crisis. Pero la sobrevaluación del peso, atado inflexiblemente al dólar por la Ley de Convertibilidad, encareció las exportaciones de la Argentina dificultando el equilibrio de su balanza de pagos, no obstante haber sido el país más beneficiado desde la implantación del Mercosur, al ser el único que obtuvo saldos positivos en la balanza comercial con todos sus socios. Entre 1995 y 2002 (3 meses) la Argentina acumuló en su balanza comercial un superávit de u\$s 6,99 mil millones con el Brasil, u\$s 2,26 mil millones con el Paraguay, y u\$s 2,96 mil millones con el Uruguay, totalizando un saldo positivo de alrededor de u\$s 12,21 mil millones, en el período de esos cinco años.¹⁴ En tanto, en el mismo período, el déficit acumulado del intercambio con los países del NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México), al que Domingo Cavallo quería que adhiriese la Argentina, alcanzó un total de u\$s 20,14 mil millones, de los cuales u\$s 17,67 mil millones solamente con los Estados Unidos.¹⁵ La crisis financiera internacional, que comenzó en Asia en 1997, alcanzó a Rusia en 1998 y llegó al Brasil en 1999, agravó los problemas estructurales de la Argentina, detonando fuertes reclamos sociales y acarreado la inestabilidad política con la caída del gobierno del presidente De la Rúa el 22 de diciembre de 2001. La alternativa de la Argentina desembocó en el *default* y en la suspensión del pago de la deuda externa, que pasó de u\$s 132 mil millones a u\$s 141 mil millones a comienzos del 2002.

La situación económica y financiera de Brasil hacia fines de los años '90 se perfiló igualmente crítica. El gobierno de Fernando Henrique Cardoso logró bajar la inflación a un dígito anual, pero no lo hizo tan rápidamente como para evitar una sustancial alza del tipo de cambio real durante su fase de transición, lo que encareció los productos brasileños en términos internacionales, desembocando –juntamente con la rebaja de sus tasas aduaneras y las barreras para-arancelarias mantenidas por los Estados Unidos– en enormes saldos negativos. El Brasil, cuyo superávit comercial había sido el tercero mayor del mundo en los años '80 (aunque muy debajo de Japón y Alemania) pasó a acumular saldos negativos en su balanza comercial que, entre 1995 y 2000, alcanzaron a u\$s 38,1 mil millones, de los cuales u\$s 23,92 mil millones con los países del NAFTA (u\$s 19,33 mil millones solamente con los Estados Unidos).¹⁶ En 2002 (cuatro meses), su saldo negativo acumulado con los países del NAFTA alcanzó la suma de u\$s 21,26 mil millones, sin embargo, pasó a obtener un pequeño superávit en la balanza comercial con los Estados Unidos, después de la desvalorización de su moneda, lo que redujo su déficit a u\$s 17,67 mil millones. Al mismo tiempo que su deuda externa aumentó cerca del 100%, pasando de u\$s 123,4 mil millones en 1990 a u\$s 235 mil millones en el 2000 y a u\$s 251 mil millones (2001).¹⁷ Ese endeudamiento, junto con la pérdida

14. ALADI <http://www.aladi.org/finicio.htm>

15. ALADI <http://www.aladi.org/finicio.htm>.

16. <http://www.aladi.org/finicio.htm>

17. De acuerdo con las estadísticas de la ALADI, el saldo de la deuda externa, al fin de 2001, era de u\$s 226,03 mil millones.

de competitividad y el desequilibrio de la balanza comercial, produjeron un déficit en la cuenta corriente del balance de pagos que, en 1990, representó cerca del 60% de las exportaciones, debilitando la confianza de los inversores, sobre todo, después de la crisis asiática de 1997 y de la moratoria de Rusia en 1998. El ataque especulativo que en enero de 1999 desvalorizó el real y significó la pérdida de dos tercios de las reservas internacionales, desgastó significativamente al gobierno de Fernando Henrique Cardoso en el transcurso de pocos meses y apenas iniciado su segundo mandato (1999–2003) debió impulsar un ajuste económico que redujo el déficit fiscal de más del 10% del PBI en 1999 al 4% en el 2000.

Sin embargo, en 2002, la insolvencia que llevó a la Argentina al *default* se perfilaba como una amenaza concreta para el Brasil, si el FMI y la comunidad financiera internacional no acordaban en reducir al 10% los intereses por los empréstitos internacionales, en torno al 25%. La deuda externa de Brasil se elevaría, entonces, a u\$s 251 mil millones¹⁸ en 2001. Según declaraciones del gran inversor George Soros vertidas en la London School of Economics and Political Science (LSE), una probable moratoria brasileña causaría mayor daño a otros países de América del Sur, que quedarían fuera del mercado de capitales, pues Brasil, sin embargo, pasó a obtener superávit en la balanza comercial del 2001 y, por ese motivo, podría crecer razonablemente después de su reorganización.¹⁹ En esa misma conferencia, Soros criticó varias veces al sistema financiero internacional, afirmando que “si un país como el Brasil, que hizo todas las cosas bien, está en esta situación, entonces la globalización falló”. Y, después de acentuar que “el Brasil siguió el consenso de Washington, pero eso no implicó crecimiento”, dijo que, “cuando el sistema no está funcionando bien, es preciso modificarlo”. La elección de Luiz Inácio Lula da Silva para la presidencia del Brasil indicó que el pueblo deseaba ese cambio. Además, como también observó George Soros, es “inaceptable” que “la democracia solamente sea buena si el elegido es el candidato de los mercados”.²⁰

De hecho, como si observó Soros, Brasil, hiciera la moratoria, podría crecer razonablemente después de su reorganización, puesto que su situación, aunque fuera grave, era muy distinta y más favorable que la de Argentina y de los demás países de la América del Sur. Brasil continuaba siendo uno de los países con mayor desigualdad en la distribución de la renta, y en el que la indigencia y la pobreza de amplios sectores sociales, 22% debajo de la línea de pobreza, (1998 est.) coexistían con la ostentación de la riqueza y el consumo superfluo de una minoría. Pero constituía uno de los diez mayores parques industriales del mundo, relativamente eficiente y diversificado en sus exportaciones, compuestas en más del 50% por manufacturas y productos de tecnología avanzada, que suplantaron al azúcar, ca-

18. En conformidad con los datos de la ALADI, el saldo de la deuda externa de Brasil, al fin de 2001, era de u\$s 226,03. <http://www.aladi.org/inicio.htm>

19. Soros dice que Brasil puede renegociar su deuda, BBC Brasil, 8 de octubre de 2002, publicada a las 17h15 GMT.

20. Ibid.

fé, cacao y otros *commodities* con escasa elaboración. Y tenía un PBI de \$1.34 trillion (2001 est.), calculado por la paridad del poder de compra²¹, superior al de México, u\$s 920 mil millones (est. 2001)²² y al de Canadá, u\$s 875 mil millones (2001 est.), mayor que el de Rusia, u\$s \$1.2 trillion (2001 est.) y casi tan grande como el de Francia, u\$s 1.51 trillion (2001 est.), Reino Unido, u\$s 1.47 trillion (2001 est.), e Italia, u\$s 1.402 trillion (2001 est.)²³

Todos los demás países de América del Sur se enfrentaban igualmente, en mayor o menor grado, con una crisis similar. Con una población de 3,3 millones de habitantes, la economía del Uruguay permaneció prácticamente estancada. El déficit acumulado en la balanza comercial, entre 1995 y 2002, ascendió a u\$s 2,60 mil millones con sus socios en el Mercosur²⁴, y a u\$s 1,38 mil millones, con los miembros del NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México).²⁵ El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos subió de u\$s 280 millones en 1997 a u\$s 565 millones (a) en 2001.²⁶ Y el PBI, que subió de u\$s 1,9 mil millones en 1997 a u\$s 2,0 mil millones en 1998, cayó a u\$s 1,9 en 1999 y se redujo aún más cerca de -1,8%, en 2000 (e), e -2,9, en 2001 (e).²⁷

En Paraguay, la economía, estancada desde la finalización de la construcción de Itaipú en 1982, entró en franca declinación a partir de 1996. Entre 1995 y 2000 tuvo un saldo negativo acumulado de u\$s 1,76 mil millones en su intercambio con los países del NAFTA (solamente con los Estados Unidos el déficit acumulado fue de u\$s 1,59 mil millones) y de u\$s 5,60 mil millones, con sus socios en el Mercosur.²⁸ El PBI cayó el 0,6% en 1998 y siguió cayendo -0,1%, en 1999 y 0,6%, en 2000, mientras que los problemas sociales se agravaron. El agudizamiento de la exclusión social, la extrema pobreza —que alcanzó a un tercio de los campesinos— el aumento del desempleo, que pasó del 6% en 1995 al 15% en 1999, junto al deterioro de las condiciones de vida de los sectores medios, hicieron cada vez más probable un conflicto social. Presionado por esta situación, ante la amenaza de una huelga general por 30 días y la marcha de 3.000 campesinos sobre Asunción, el presidente Luis González Macchi tuvo que ceder y derogar la ley 1615, el 5 de junio de 2002, que autorizaba la privatización de la compañía telefónica Copasco, de

21. De acuerdo con el método tradicional de la ALADI, el PBI del Brasil en 1999 era de u\$s 711,1 mil millones, el de Argentina de u\$s 272,9 mil millones, el de Uruguay de u\$s 19,6 mil millones, y el de Paraguay de u\$s 8,5 mil millones. <http://www.aladi.org/inicio.htm>.

22. El PBI de México, según el método de la ALADI, era de u\$s 446,2 mil millones en 1999.

23. <http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html>

24. Solamente con el Paraguay el Uruguay acumuló superavit, en un total de u\$s 353.444 millones.

25. <http://www.aladi.org/inicio.htm>. Solamente con los EUA el saldo negativo fue del orden de u\$s 1,46 mil millones en el mismo período.

26. En las estadísticas de ALADI no hay datos más recientes.

27. <http://www.aladi.org/inicio.htm>.

28. *Idem*.

la empresa de agua potable Essap y de la red ferroviaria estatal. Ocho días después, el 14 de junio, la agitación recrudeció en el Perú, donde el pueblo se levantó contra las privatizaciones de las empresas eléctricas Egasa y Egesur programadas por el presidente Alejandro Toledo, al tiempo que la protesta paralizó varios departamentos, sobre todo las ciudades de Arequipa –la segunda del país– y Cuzco, extendiéndose hasta Puno en la frontera con Bolivia, y Tacna, vecina a Chile.

La situación económica y social de Chile, presentada como un ejemplo del neoliberalismo, que el dictador Augusto Pinochet (1973–1989) implantó en medio de una brutal y sangrienta represión, no era muy diferente de la que se había configurado en los demás países de la región. Con una población de 15,3 millones de habitantes y un PBI del orden de los u\$s 153,1 mil millones (2000 est. por la paridad del poder de compra) o u\$s 77 mil millones (1999 según el método usado en la ALADI), su deuda externa se duplicó en los años '90, pasando de u\$s 18,5 mil millones (1990) a u\$s 39.6 mil millones (2001), el 9% de su fuerza de trabajo estaba desocupada en diciembre de 2000, casi un millón de personas vivían bajo los niveles de pobreza y cerca de 700.000 familias estaban endeudadas, como casi toda la clase media.²⁹ La posición de su balanza comercial con los países del NAFTA no era mejor que la de los países del Mercosur. El saldo negativo acumulado, de 1995 a 2001, ascendía al u\$s 10,79 mil millones, más o menos la mitad del déficit de Argentina (u\$s 20,14 mil millones), cuyo PBI era de u\$s 453 billion (2001 est.), y de Brasil (u\$s 21,26 mil millones), cuyo PBI, de \$1.34 trillion (2001 est.), era casi diez veces más grande que el suyo.³⁰

También en Bolivia, mientras su economía creció a una tasa media del 3,9%, entre 1990 y 1998, y la inflación pasó del 7.000% en 1985 al 3% en 1999, el propio presidente, Hugo Banzer, deploró que la estabilidad económica a lo largo de 15 años no hubiera contribuido para disminuir los índices de pobreza que en el 2000 involucraban a más de la mitad de la población boliviana (63%), especialmente de origen indígena. El deterioro de las condiciones de vida se aceleró a partir de 1985 –durante los tres quinquenios en que Bolivia fue presentada como modelo de libre mercado– y alcanzó principalmente a los campesinos, reduciendo a la miseria a más del 80% de la población rural. La cuestión agraria, que la revolución de 1952 buscara solucionar mediante el reparto de los latifundios y la distribución de tierras para los trabajadores rurales,³¹ se transformó otra vez en un grave factor de tensiones sociales impulsando nuevos conflictos. El aumento de las tarifas de agua en la ciudad de Cochabamba, como consecuencia de un contrato con una empresa extranjera, desencadenó entre el 7 y 8 de abril de 2000 un levantamiento popular, que se extendió a los cocaleros (productores de coca) de la región del Chapare y a otros campesinos y trabajadores en diferentes ciudades. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) inició en-

29. Vellendar, Benedikt, "Argentinien-Krise belastet Chile", en *Die Welt*, 27-08-2001.

30. CIA-World Factbook. (<http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html>).

31. Moniz Bandeira, 1998, *op. cit.*, pp. 113–115.

tonces el bloqueo de carreteras y, ante la amenaza de convulsión social, en que no sólo los campesinos sino también los estudiantes y policías reclamaban una mejoría en las condiciones de vida,³² Banzer decretó el estado de sitio por 90 días, intensificando la represión que generó la muerte de seis personas, 74 heridos y 92 presos. La agitación prosiguió durante varios días y el 20 de abril Banzer levantó el estado de sitio después de firmar convenios con los campesinos a través de la mediación de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, además de prometer la reactivación de la economía y pedir perdón a los pobres por el sistema social excluyente y discriminatorio. Las tensiones, sin embargo, volvieron a agravarse meses después cuando se anunció la construcción de tres bases militares en la región del Chapare, con el apoyo de los Estados Unidos en el marco de la lucha antidrogas. En ese contexto estallaron otras manifestaciones de protesta que desembocaron en el bloqueo de rutas y en violentos choques entre las tropas del ejército y los campesinos que se oponían a la erradicación de los cultivos de coca y a la Ley de Aguas por impedir el funcionamiento de las redes a su cargo. La renuncia de Banzer apareció como la única salida para apaciguar al país.³³

En Ecuador, otro laboratorio para la experiencia de las políticas neoliberales, la situación se presentó todavía más difícil que en Bolivia. En marzo de 1999, al profundizarse la crisis económica y social, el presidente Jamil Mahuad planeó cerrar el Congreso, como el presidente Alberto Fujimori lo hiciera en el Perú, y consumó su intención, no obstante el embajador norteamericano Leslie Alexander le advirtió que Washington se opondría a cualquier ruptura del orden democrático.³⁴ El propio Bill Clinton exhortó mediante una carta a "*maintain Ecuador's unwavering commitment to democracy*", prometiendo apoyar a Ecuador en sus negociaciones con el FMI. Sin embargo, cuatro meses después, el 5 de julio de 1999, Mahuad decretó el estado de emergencia y movilizó a las fuerzas armadas para reprimir la agitación social —huelgas, bloqueo de las principales carreteras— desencadenada por el aumento del 13% en el precio de los combustibles. Esa ola de protestas, promovida inicialmente por los sindicatos del transporte público, fue creciendo con la adhesión de los productores de bananas —principal producto de exportación del país— y mediante el corte de rutas, que, sumado a la inactividad de las emisoras de radio y televisión, provocó la paralización del comercio y de la in-

32. Los sectores de la oposición no olvidaron el saldo del régimen autoritario que Banzer instaló en Bolivia en 1973: 1.500 presos políticos, 900 exiliados y más de 200 muertos, entre los cuales cerca de un centenar fueron campesinos masacrados en 1974, según la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia.

33. Aquejado por un grave cáncer de pulmón, Banzer, el 6 de agosto de 2001, presentó su renuncia al Congreso nacional en Sucre, la capital constitucional de Bolivia, y el vicepresidente Jorge Quiroga asumió el gobierno.

34. Johnson, Tim, "Clinton: Ecuador must maintain democratic rule", *The Miami Herald*, 18-03-99.

dustria, así como el desabastecimiento de las ciudades. Al presidente Mahuad no le quedó otra alternativa que derogar el aumento del precio de los combustibles.³⁵ Pero la inquietud social no cesó. Cerca de 10.000 indígenas descendieron de la sierra y marcharon sobre la ciudad de Quito, reclamando mayor asistencia sanitaria y educativa para sus comunidades. De este modo, los conflictos sociales recrudecieron a medida que la economía de Ecuador, donde también cerca del 70% de la población vivía en la extrema pobreza³⁶, se deterioraba cada vez más, cayendo su PBI de u\$s 19,2 mil millones en 1998 a cerca del 12% en 1999 en medio de una inflación del 60,7%, la más alta de los años '90.³⁷ El 6 de enero de 2000, el presidente Mahuad –que pretendía promover la dolarización de la economía, asesorado por economistas argentinos entre los cuales estaba Domingo Cavallo³⁸– decretó otra vez, el estado de emergencia suspendiendo los derechos constitucionales y movilizó al Ejército para controlar el orden ante las sucesivas manifestaciones de protesta. Los sindicatos, los partidos políticos de oposición y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), bajo la dirección de Antonio Vargas, exigieron su renuncia. Pocos días después, el 10 de enero, el Banco Central de Ecuador aprobó el plan de dolarización y el día 15 Mahuad se presentó en el Congreso para defender las leyes necesarias que pondrían en vigencia esa dolarización. Pero el estado de emergencia no pudo impedir que la insurrección de los

35. Abdalá Bucaram, que tenía su base política en Guayaquil, fue electo presidente por el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) en 1996, prometiendo reformas económicas y sociales para romper el poder de la oligarquía. Líder de personalidad populista y excéntrica (se vanagloriaba de ser llamado “el loco” por el pueblo), provocó también un enorme descontento y enfrentó una ola de protestas después de seis meses de gobierno al anunciar el 1º de diciembre de 1996 el aumento de los precios del agua, gas, luz y teléfonos. Como consecuencia de este proceso el Congreso aprobó su destitución por “incapacidad mental” el 6 de febrero de 1997, de acuerdo con el art. 100 de la Constitución de Ecuador, y el presidente de la Cámara, Fabián Alarcón Rivera, asumió interinamente el gobierno, el que fue confirmado por un referéndum popular en 1997. Bucaram se refugió en Panamá. Con la reforma de la Constitución, Jamil Mahuad, del partido Democracia Popular y Gustavo Noboa, del Partido Social Cristiano fueron electos por el Congreso en diciembre de 1998.

36. U.S. Department of State –Background Notes: Ecuador, June 2000. Released by the Bureau of Western Hemisphere Affairs– April 2001. <http://www.state.gov/r/pa/bgn/index.cfm?docid=2906>.

37. <http://instruct1.cit.cornell.edu/Courses/crp522/ecbo0900.pdf>

38. Después de que salió del ministerio de Economía de la Argentina en 1996, Domingo Cavallo fue contratado por Abdalá Bucaram, electo ese año presidente de Ecuador, para que implantase un sistema de convertibilidad de la moneda ecuatoriana respecto al dólar. Con la caída de Bucaram, Jamil Mahuad tomó la decisión de dolarizar la economía ecuatoriana asesorado por un grupo argentino, que incluía la Fundación Mediterránea (vinculada a Domingo Cavallo) y al economista Guillermo Calvo, nombrado posteriormente director del Banco Interamericano de Desarrollo.

indígenas (4,2 millones en una población de 12 millones) con la adhesión de los sindicatos y partidos políticos, exigiera la renuncia de Mahuad, de los diputados y de los miembros del Poder Judicial. En esas circunstancias, el 21 de enero, un grupo de coroneles insurreccionó al Ejército apoyando a las comunidades indígenas, y Mahuad, informado de que no tenía más condiciones de seguridad en el Palacio de Carondelet, se refugió en una base militar, después de declarar que no renunciaría. Los indígenas y los militares ocuparon los edificios públicos así como la sede de los tres poderes en Quito, mientras que Antonio Vargas proclamó la disolución del Congreso y de la Suprema Corte, anunció la remoción de Mahuad de la presidencia de Ecuador y la formación de un parlamento popular. Poco más tarde se constituyó una Junta de Salvación Nacional que luego fue disuelta ante intensas negociaciones, en donde participaron representantes del gobierno estadounidense, permitiendo que el Congreso se reuniese en Guayaquil el 22 de enero y reconociese al vicepresidente Gustavo Noboa como sucesor constitucional de Mahuad. Al asumir el gobierno, Noboa trató de impulsar las privatizaciones de las empresas eléctricas y de los bancos estatales y, en marzo de 2000, transformó al dólar en la moneda nacional de Ecuador, convertido así en un “nuevo Panamá”, país que desde hacía años había adoptado la moneda norteamericana y era considerado de facto como el 51° Estado norteamericano.³⁹

Además, en declaraciones ante el Caucus on International Narcotics Control del Senado norteamericano, el general Charles E. Wilhem, comandante en jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, reconoció que en el Ecuador, como en otras naciones situadas en su área de responsabilidad, en Sudamérica “*democracy and free market reforms are not delivering tangible results to the people*”. Muchas naciones estaban en peores condiciones económicas que antes de la restauración de la democracia, afirmó y se preguntó: “*Can democracy survive without an economic system that produces adequate subsistence and services for the majority of its citizens?*”.⁴⁰ De hecho, la situación en Ecuador no mejoró, dado que, mientras sus reservas monetarias disminuyeron, las importaciones crecieron sin que hubiese el correspondiente aumento de las exportaciones, transformando así en negativa su balanza comercial, agravando el déficit del balance de pagos y llevando al país a la anarquía monetaria como consecuencia de la dura problemática de la dolarización y el desorden presupuestario. La dolarización de la economía no sólo no resolvió sino que agravó sus problemas.⁴¹ Mientras, en febrero de 2002, los indígenas anunciaron que realizarían nuevas manifestaciones en Quito contra las privatizaciones impulsadas por el gobierno de Noboa y para protestar contra la

39. Faiola, Anthony, *Washington Post Foreign Service*, 25 de enero de 2001, p. A01.

40. Statement of General Charles E. Wilhelm, commander-in-chief, U.S. Southern Command, *Before the Senate Caucus on International Narcotics Control*, 23 de marzo de 2000.

41. “La dolarización no sacó a Ecuador de la crisis. El sistema acumula serios problemas”, en *La Nación*, Buenos Aires, 14 de abril de 2002.

falta de cumplimiento del acuerdo que había puesto fin al levantamiento a principios del 2001.⁴²

Venezuela, a su vez, cayó en una crisis económica, social y política a partir de 1989 cuando, apenas algunos días después de la asunción a la presidencia de Carlos Andrés Pérez, de la Acción Democrática, el pueblo salió a las calles para repudiar los intentos de aplicar un duro ajuste económico exigido según los moldes del FMI. Los violentos disturbios y saqueos culminaron con casi 300 muertos y el ambiente de descontento se intensificó de tal modo que llevó al teniente coronel Hugo Chávez, al frente de unos 300 efectivos, a intentar un golpe de Estado el 3 de febrero de 1992. El golpe fracasó pero Chávez adquirió popularidad a tal punto que se erigió legalmente como presidente de Venezuela en 1998 al frente del Movimiento V República (MVR), con la promesa de promover “una revolución pacífica y democrática”. Sin embargo, Chávez no tuvo condiciones para contener la crisis económica y social, a pesar de que Venezuela era –junto con Ecuador– uno de los dos únicos países de América del Sur que había podido mantener durante la segunda mitad de los años ‘90, saldos positivos en su balanza comercial debido a las exportaciones de petróleo hacia los Estados Unidos. La fuga de capitales, evaluada entre u\$s 15 y 20 mil millones, causada por las inundaciones y la falta de credibilidad de fines de 1999 deterioraron la situación de Venezuela, que se tornó bastante inestable a fines de 2001, y coadyuvó para desestabilizar al gobierno. En ese contexto, y dada la sobrevaluación de la moneda venezolana (el bolívar) Chávez no tuvo otra alternativa que liberar el tipo de cambio a principios del 2002, abandonando el sistema de bandas, a fin de disminuir la pérdida de reservas, que cayeron de u\$s 16,1 mil millones en enero de 2001 a u\$s 12,2 mil millones en diciembre de ese mismo año, la mayor caída en una década, y reduciendo las reservas del Banco Central en un 23,7%. Solamente en la primera semana de febrero de 2002 se fugaron de Venezuela cerca de u\$s 700 millones. La reducción de reservas, acompañada por la caída de los precios del petróleo, dejó al gobierno venezolano escaso margen de maniobra. En medio de su peor crisis política, Hugo Chávez se vio obligado a reducir el presupuesto de u\$s 34,3 mil millones, recortando los gastos en un 7% y reduciendo a la mitad las deudas del gobierno, estableciendo así un ajuste económico tan fuerte que derribó abruptamente el valor del bolívar (19% con relación al dólar), lo que transformó el centro de Caracas en un escenario similar al de Buenos Aires, donde las manifestaciones de *cacerolazos* derribaron al gobierno de la dupla Fernando De la Rúa–Domingo Cavallo (19/21–12–2001). Entre el 11 y el 12 de abril, después de esos acontecimientos, los generales José Vicente Rangel, ministro de Defensa, Manuel Rosendo, jefe de Seguridad del Palacio Miraflores, y Lucas Rincón Romero, jefe del Estado Mayor del Ejército de Venezuela, derrocaron a Chávez y anunciaron que había renunciado a la presidencia de la República. El presidente de la entidad empresarial Fedecámaras, Pedro Carmona Estanca, asumió el gobierno de Venezuela, pero el golpe de Estado, alenta-

42. *El Universal*, Caracas, 08–05–2002.

do por los Estados Unidos, fracasó en virtud de la oposición popular y del repulso de los demás países de América del Sur.

En Colombia, sumergida en una cruenta guerra civil desde hace más de 40 años, los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) y del Ejército del Pueblo (EP) controlan desde 1997 al menos más de 622 de las 1.071 municipalidades, es decir, casi la mitad del territorio nacional. La escalada de violencia en el interior, promovida por los paramilitares, las FARC-EP y el Ejército, obligó a más de 700.000 personas a abandonar sus viviendas en los últimos años, elevando a 1,5 millones el total de refugiados, número muy superior al de los albaneses étnicos que huyeron de Kosovo y el tercero del mundo, después de los refugiados de Sudán y de Angola. Legiones de campesinos, entre ellos casi un millón de mujeres y niños empobrecidos, se establecieron alrededor de Bogotá y otras grandes ciudades conformando un cinturón de miseria, al tiempo que en 1998 Colombia se debatía en la peor recesión de su historia, a tal punto, que redujo su PBI de u\$s 98 mil millones en ese año a u\$s 94,2 mil millones en 1999, y u\$s 84,8 mil millones en 2001. Además, la deuda externa de Colombia saltó de u\$s 17,8 mil millones en 1990 a u\$s 38,9 mil millones a principios del 2002, lo que representó casi el 50% del PBI alcanzado ese mismo año, que llegó a u\$s 89,6 mil millones. "El Estado colombiano está totalmente quebrado, difícilmente tenga con qué pagar los sueldos y el déficit fiscal será el 31 de diciembre del 4,1% sobre el producto bruto interno. La Argentina tenía menos cuando estalló la gran crisis", declaró el ministro del Interior, Fernando Londoño, el 9 de octubre de 2002, cuando el déficit fiscal ya había pasado a u\$s 3,2 mil millones.⁴³ A su vez, el ministro de Hacienda, Roberto Junguito, advirtió que si el gobierno financia el gasto público con una emisión millonaria por parte del Banco República, "la inflación se dispararía" y podría llevar a Colombia a "una argentinización" de la situación económica. Y la perspectiva era todavía más sombría, debido al fracaso del proceso de paz, a la creciente intervención militar de los Estados Unidos y al hecho de que Álvaro Uribe, después de asumir la presidencia, decretó (en agosto de 2002) el estado de excepción, a fin de detener la escalada de violencia y anunció un plan para reclutar un millón de civiles como informantes del ejército, medidas que podían implicar una amenaza a los derechos humanos, una restricción a la oposición política y el establecimiento de un estado totalitario en Colombia.

Esa crisis, que a fines de los '90 ya avasallaba a todos los países de América del Sur, no comenzó, es cierto, con la ejecución del programa neoliberal del Consejo de Washington, sino que pre-existía. Pero las condiciones económicas, sociales y políticas, que en los años 60 y 70 habían generado los movimientos de insurrección, se agravaron al final de una década de políticas neoliberales ejecutadas por gobiernos electos democráticamente. La deuda externa continuó siendo un problema para toda América Latina. Al finalizar el 2001, según el informe "América Latina y el Caribe: Cómo Cierra la Economía en 2001", elaborado por la Secre-

43. *la Nación*, 10-10-2002, p. 3, Exterior.

taría permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), la deuda alcanzó la "alarmante" cifra de u\$s 784 mil millones, o sea, cerca de u\$s 30 mil millones más que en el 2000, y su tendencia era creciente, acercándose a los u\$s 800 mil millones, dependiendo del crecimiento que alcanzase la deuda de la Argentina.⁴⁴ Mientras tanto, a lo largo de los años '90, casi todos los países de Sudamérica (la Argentina desde 1992, y el Brasil a partir de 1994) pasaron a tener déficit en su balanza comercial como consecuencia, sobre todo, de la desregulación de la economía y de la apertura unilateral de los mercados, intensificada mediante los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT, sin que las barreras para-arancelarias (cuotas, técnicas, sanitarias, etc.) fuesen instituidas, dificultando las importaciones, como hacían los Estados Unidos y otros integrantes de la Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Sin contar a Venezuela y a Ecuador,⁴⁵ que fueron los únicos que obtuvieron superávit debido a las exportaciones de petróleo para los Estados Unidos, el saldo negativo acumulado de todos los demás países de América del Sur, entre 1995 y 2002 (cuatro meses⁴⁶), alcanzó el total de u\$s 68,10 mil millones. Solamente el déficit acumulado de los cuatro socios del Mercosur, en su comercio con los países del NAFTA, fue de u\$s 44,54 mil millones, en el mismo período. Por otro lado, las remesas de intereses, *royalties* y transferencias clandestinas aumentaron como consecuencia de la desnacionalización de las empresas, sobre todo estatales, al pasar a ser controladas por capitales extranjeros. Dado que pasaron a tener solamente déficit en su balanza comercial y las inversiones directas prácticamente cesaron, después de las privatizaciones, se hizo cada vez más difícil para los países del Cono Sur, en tales circunstancias, cumplir con el servicio de la deuda externa hasta entonces alcanzado, cubierto, en parte, con el saldo positivo de la balanza comercial, con inversiones directas y créditos externos.

La situación de los países de América del Sur, implantado el ALCA, se agravaría aún más, pues "el principio subyacente de la política comercial de Washington siempre fue "apoyar la prosperidad de los Estados Unidos, los puestos de trabajo en los Estados Unidos y la riqueza de las empresas americanas", conforme las propias palabras de la Embajadora Charlene Barshefsky, antigua USTR en el segundo gobierno del presidente Bill Clinton.⁴⁷ Ella entendía que, con el fin de la Guerra Fría, las alianzas comerciales, en el siglo XXI, tendrían un papel cada vez más im-

44. Secretaría Permanente del SELA (Sistema Económico Latinoamericano), "Informe de coyuntura América Latina y el Caribe: cómo cierra la economía en 2001".

45. Venezuela tuvo un superávit acumulado de cerca de u\$s 46,81 mil millones y Ecuador, de u\$s 2,45 mil millones. <http://www.aladi.org/inicio.htm>.

46. Los datos de Bolivia, cuyo déficit acumulado en el período fue de u\$s 1,37 mil millones, no incluyen los cuatro meses de 2002.

47. (...) "To support U.S. prosperity, U.S. jobs and the health of the U.S. companies", Barshefsky statement before House Trade Panel 3/18, U.S. *Information and Texts*, n° 011, March 20, 1997, p. 42.

portante en la definición de las relaciones entre las naciones, del mismo modo que los pactos militares, en el siglo XX, modelaron el sentido esencial de las relaciones globales.⁴⁸ Y al pedir a la Cámara de Diputados rápida aprobación del *fast track*, en 1997, ella dijo que los gobiernos de los países con mercados en rápido crecimiento en Asia y en América Latina tenían entendimientos y establecían nuevas y exclusivas alianzas comerciales en “potencial detrimento de la prosperidad y del liderazgo de los Estados Unidos”.⁴⁹ La entonces Secretaria de Estado de Bill Clinton, Madeleine K. Albright, también dejó claro que el objetivo expreso del ALCA y de la APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*), así como también la red de más de 200 acuerdos comerciales, entre los cuales estaban los de la Rodada Uruguay, era modelar el sistema económico global de modo que pasase a funcionar en beneficio de América, i. e., de los Estados Unidos.⁵⁰ Tales acuerdos permitieron un incremento del 34% en las exportaciones norteamericanas y la creación de 1,6 millón de nuevos puestos de trabajo, desde 1993.⁵¹ Según Madeleine Albright reafirmo en el Senado, la “primera obligación” (“*primary obligation*”) del gobierno norteamericano era para con sus propios ciudadanos.⁵² De donde se concluye que el proyecto del ALCA no apunta a beneficiar a los otros países del hemisferio, sino, sobre todo, a los Estados Unidos.

-
- 1) Barshefsky testimony to Senate Finance Committee, *U.S. Information and Texts*, n° 5, February 5, 1997, p. 8.
 - 2) Barshefsky statement before House Trade Panel 3/18. *U.S. Information and Texts* n° 011, USIS, March 20, 1997, p. 38. A parte do debate com os senadores, na qual ela deu o Mercosul como exemplo de “little units or system of rules and obligations” não foi divulgada pela USIS em pelo Homepage da USTR na Internet. Vide também Passos, José Meirelles Passos – “Avanço do Mercosul preocupa americanos” in *O Globo*, Rio de Janeiro, 2.5.1997, 2a. edição.
 - 3) “(...) We must continue shaping a global economic system that works for America”- Secretary of State—Designate Madeleine K. Albright. Prepared statement before the Senate Foreign Relations Committee, as released by the Office of the Spokesman, Department of State, Washington, D.D., January 8, 1997. <http://www.secretary.state.gov/statements/970108a.html>
 - 4) *Ibid.*
 - 5) Secretary of State—Designated Madeleine K. Albright, prepared statement before the Senate Foreign Relation Committee, January 8, 1997, *Ibid.*

RESUMEN

A fines de la década de 1980 la deuda externa seguía resultando una pesada carga para América Latina, el Institute for International Economics convocó a una conferencia, para la cual fueron invitados ocho economistas de países latinoamericanos con la finalidad de formular un diagnóstico y sugerir medidas de ajuste para superarla. El economista norteamericano John Williamson presentó en esa oportunidad, un documento con las propuestas conocidas como el Consenso de Washington, considerando cambios prioritarios: la disciplina fiscal; reducción del gasto público; reforma tributaria; tasas de intereses positivas; liberalización del sistema cambiario y del comercio; poner fin de las restricciones a las inversiones extranjeras; privatización de las empresas estatales; desregulamiento de las actividades económicas y garantías para los derechos de propiedad, con el fin de alcanzar la estabilización monetaria y el pleno restablecimiento de las leyes del mercado. Estas medidas a la vez que resultaban una condición fundamental para que los países de América Latina pudiesen renegociar la deuda externa y recibir nuevos recursos de los organismos financieros internacionales, abrían posteriormente el camino al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)

Después de historiar la aplicación de medidas similares en la Argentina desde 1955, el autor analiza los efectos catastróficos que estas políticas exigidas por el FMI y Washington produjeron en Argentina y Brasil y en las demás economías de América del Sur durante la última década.

ABSTRACT

At the end of the 1980's the foreign debt was still a heavy burden for Latin America. The Institute for International Economics convened a conference, to which eight economists from Latin American countries were invited with a view to making a diagnosis and suggesting stringency measures to resolve the problem. On that occasion, the American economist John Williamson submitted a document containing the proposals known as the Washington Consensus, which considered the following changes as priority: fiscal discipline; reduction in public spending; tax reform; positive interest rates; liberalization of the foreign exchange system and trade; an end to restrictions on foreign investment; privatization of state enterprises; deregulation of economic activity and guarantees for property rights, with the purpose of achieving monetary stability and full restoration of the laws of the market. These measures, as well as a basic condition for the Latin American countries to renegotiate their foreign debt and receive new resources from international financial bodies, subsequently opened the way for the American Free Trade Area (Área de Libre Comercio de las Américas - ALCA)

After following the history of the application of similar measures in Argentina since 1955, the author analyses the catastrophic effects these IMF and Washington-imposed policies produced in Argentina and Brazil and in the other South American economies during the last decade.